

EJECUTORIA de la Suprema Corte de Justicia.

México, Julio 16 de 1872.—Visto el juicio de amparo promovido ante el Juzgado de Distrito de Toluca, por los CC. Manuel Hernandez, Abraham Miranda, Vicente y José Arias, Gregorio y Domingo Zepeda, Marcelino y Joaquín Juárez, Ventura Rojas y Emigdio Albarran que han continuado el recurso hasta este estado, mas Cirilo Molina, Feliciano Martinez, Valentin Maya, Zeferino Mendoza y José Gómez que desistieron antes de la prueba, y Juan de Mata Trinidad y Pedro Rojas y Rosalío Rojas, los dos primeros que aunque pretendieron que continuase respecto de ellos, no volvieron ni por sí ni por personero á agitar y contestar á su vez; y el último que completamente desertó del juicio, todos los que lo intentaron contra la providencia del C. Gefe Político de Tenango por haberlos tomado de leva, remitiéndolos al Gobierno del Estado, quien los destinó en calidad de reemplazos al ejército de la federacion, alegando que con este hecho se han violado las garantías consignadas en los artículos 9, 16, 19 y 20 de la Constitucion de 1857. Vistas las constancias de autos y considerando: que la aprehension de los quejosos se verificó en los dias 4, 5 y 6 de Mayo en que habia terminado la ley de 2 de Diciembre de 1871, que suspendia las garantías invocadas por los peticionarios en su escrito de queja; que los promoventes han probado estar ocupados en trabajar para el sostén de sus familias, el hecho que motivó el presente recurso importa una violacion expresa de las garantías consignadas en los artículos 9, 16, 19 y 20 de la Carta federal de la República con tales fundamentos se decreta: que es de confirmarse y se confirma la sentencia pronunciada por el Juzgado de Distrito del Estado de México, cuya parte resolutiva dice: "Que es de ampararse y que desde luego y en consecuencia ampara

contra la providencia antes citada del Gefe Político de Tenango á Manuel Hernandez, Abraham Miranda, Vicente y José Arias, Domingo y Gregorio Zepeda, Marcelino y Joaquín Juárez, Ventura Rojas y Emigdio Albarran, y 2º: mando sobreseer respecto de los demas."

Devuélvanse sus actuaciones al Juzgado de su origen con copia certificada de esta sentencia para los efectos consiguientes, publíquese y archívese á su vez el Toca.

Así lo decretaron por unanimidad de votos los CC. Presidente y Ministros que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron.—*S. Lerdo de Tejada.*—*Pedro Ogazon.*—*Juan J. de la Garza.*—*José Arteaga.*—*P. Ordaz.*—*Ignacio Ramirez.*—*J. M. del Castillo Velasco.*—*M. Arza.*—*S. Guzman.*—*Luis Velazquez.*—*M. Zavala.*—*José García Ramirez.*—*Juan A. Mateos*, secretario.

Son copias que certifico. México, Julio 30 de 1872.—*Lic. Agustin Peralta*, oficial mayor.

AMPARO promovido ante el Juzgado de Distrito de Mérida, por Facunda Romero, contra los CC. Magistrados de la 1ª sala del H. Tribunal de Justicia del Estado de Yucatan, que sin jurisdiccion la tienen procesada por lesiones.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de distrito:

El C. Bernardo Ponce de Font, con el carácter de patrono de Facunda Romero, en la causa que se le sigue por lesiones, pide amparo contra el H. Tribunal de 3ª instancia de este Estado que conoce de ella en grado de súplica, fundándose en el artículo 1º, fraccion 1ª de la ley orgánica de 20 de Enero de 1869, porque dice: que habiendo trascurrido el período

de dos años para el cual fueron elejidos popularmente aquellos ministros de justicia, conforme al artículo 82 de la Constitucion local, vigente al tiempo de su eleccion, y siendo contrario al 14 de la general de la República el transitorio incluido en la particular del Estado reformada en 21 de Enero de 1870, carecen absolutamente de jurisdiccion lejitima y constitucional para continuar ejerciendo sus funciones que no pueden apoyarse en esa disposicion posterior, sin darle fuerza retroactiva, y, por consiguiente, sin violar la garantía consignada en el referido artículo 14 del Código fundamental de la República. El informe emitido por el tribunal contra el que se promueve este recurso, es notoriamente sofisticado y no destuye las razones que lo motivan; porque en él se alega que la no retroactividad de la ley debe entenderse respecto de la que haya de aplicarse por hechos acaecidos con anterioridad á su promulgacion; mientras que el quejoso sostiene, no que la ley aplicada al caso ocurrente, no que la disposicion en virtud de la cual se absuelve ó condena su patrocinada por la autoridad competente sea dada con posterioridad al delito que se le atribuye, sino que el tribunal que la juzga carece en principio de toda competencia, de toda jurisdiccion y de toda autoridad para juzgarla, en razon de que la ley de que deriva su poder es nula por el efecto retroactivo que incluye, y contraria al artículo 14 del Pacto federal. Tales son los términos en que la cuestion ha sido planteada; y por muy íntimamente que se relacione con la de derecho público privado, como se objeta en dicho informe, siempre entraña en un principio de derecho público constitucional sobre el cual toca á la autoridad de vd. dar la resolución que estime justa. Porque de nada serviría garantizarla no retroaccion de las leyes, si el mismo poder público que las expide con ese defecto ó el mis-

mo que las sanciona con él, haciéndose solidario de la responsabilidad, fuese quien las examinara y decidiera acerca de su anticonstitucionalidad. Nadie puede ser juez en su propia causa ó de sus propias obras; y por eso, un poder independiente, un poder que no ha intervenido en la expedicion ni en la sancion de la ley, el poder judicial de la Nacion, es el que está en mejor amplitud y condiciones de censurarlo, y resolver si es conforme ó contrario á alguno de los preceptos de la Constitucion general, cuando, como sucede en el presente caso, se pone en la necesidad de pronunciar su fallo en el amparo solicitado contra ella. Establecidos estos precedentes, la jurisdiccion de vd. es incuestionable para resolver la cuestion de constitucionalidad de la ley de que deriva su autoridad la sala 1.<sup>a</sup> del II. Tribunal de justicia del Estado, contra cuyos actos se ha promovido este juicio de amparo, porque se lo concede expresa y exclusivamente el artículo 1.<sup>o</sup> de la ley orgánica de 20 de Enero de 1869. Ahora, respecto del artículo transitorio de la Constitucion local, tan ocasionado á revueltas armadas como la que acaba de pasar en el Estado, á representaciones populares como las que pacíficamente se han elevado al Supremo Gobierno, y á quejas individuales como la presente, el infrascrito poco en verdad tiene que exponer para demostrar la anticonstitucionalidad de esa disposicion transitoria, especie de *post-scriptum* de la Constitucion reformada en 1870, porque la prensa de la capital de la República y de este Estado, y aun los ministros, fiscal y presidente de ese mismo Tribunal contra el que se intenta este recurso, se han encargado de patentizar, con razones tan fundadas como las que sirven de apoyo al dictámen del primero, impreso en el adjunto N.<sup>o</sup> 723 de "La razon del pueblo" y las que se exponen en el oficio del segundo, fechada el 17 del corriente y publicado en

el tambien adjunto N° 730 del mismo periódico, que padece de un vicio radical que la nulifica, del vicio de la retroactividad que no consiente el artículo 14 de la Constitucion general. Y en efecto, cuando se procedió á la eleccion de los magistrados que aun permanecen ejerciendo las funciones de su ya caduco encargo, los electores eran inconscientes de la futura y ni siquiera proyectada reforma que prolongaba á cuatro años la vida oficial de aquellos; pues solo sabian, que debian durar en ella dos años conforme á lo prevenido en el artículo 82 de la Constitucion de 1862, vigente entonces. Bajo estas condiciones se verificó el pacto solemne de eleccion entre los elegidos y electores. La ley que ha venido despues á variarlo esencialmente, es una ley de circunstancias que lleva en sí misma el principio de retroactividad y que, por mas que la acepten algunos de los favorecidos con ella, la rechaza con todo el prestigio de su poder nuestro Código fundamental y la combate de distintos modos la mayoría del pueblo, que no quiere sacrificar sus mas caros derechos ni renunciar sus mas preciosas garantías. Y el pueblo no deja de tener razon; porque si hoy dejase pasar sin contradiccion ese golpe de Estado parlamentario que eleva á cuatro los dos años que deben durar los Magistrados favorecidos por su voto, mañana otros legisladores mas audaces en la vía de las reformas, dispondrán que los funcionarios de ese órden judicial ó otro cualquiera, inclusive el legislativo á que ellos corresponden, duren en sus funciones tanto tiempo cuanto vivan naturalmente. Y así, la renovacion periódica de los poderes públicos seria absurda ó imposible la práctica de las instituciones liberales bajo las cuales, por fortuna, se rige toda la Nacion. Si, pues, el presidente de la H. Sala 1ª que autoriza el adjunto informe suyo, no desconoce la fuerza de estas verdades en su citado oficio, en el

Tomo III.—Parte II.

que expresa que vuelve al ejercicio de la magistratura por el nombramiento que para desempeñarla provisionalmente ha hecho en él el actual Gefe del Ejecutivo, es de suponerse que las especies asentadas en ese informe, sosteniendo la constitucionalidad del mismo tribunal, son discurredas por sus otros dos componentes que opinan en sentido opuesto; resultando de aquí el fenómeno, de que un mismo cuerpo moral, ¡y qué cuerpo! el que decide de la honra, de la vida y de la fortuna de los ciudadanos, se componga de elementos eterogéneos, y deba su existencia á encontrados orígenes que lo bastardean: un miembro, al que gobierna discrecional pero acertadamente en virtud del estado de sitio, y los otros dos á la reformada constitucion local de que no pueden separarse. Esta anarquía, que ha surgido del primer Tribunal de Justicia del Estado, bastaria á demostrar la anticonstitucionalidad de la ley de que deriva su pretendida jurisdiccion, y, por consiguiente, la ausencia absoluta de esta, si para ponerla en evidencia no fuesen suficientes las razones expuestas por el infrascrito y las que sobre este mismo incidente ha hecho públicas la prensa nacional. En mérito de ellas, y con fundamento del artículo 14 de la Constitucion general de la República, y del primero, fraccion primera de la ley orgánica de 20 de Enero de 1869, el fiscal pide á vd. conceda el amparo que, contra el artículo transitorio de la Constitucion local reformada en 21 de Enero de 1870, y consiguientemente contra la H. Sala 1ª del Tribunal superior de justicia de este Estado, que pretende derivar su autoridad de esa disposicion, solicita el O. Bernardo Ponce Font en favor de su defendida Facunda Romero, á quien está juzgando á pesar de su absoluta falta de jurisdiccion.

Mérida, Junio 24 de 1872.—*P. Hijelos.*  
Es copia que certifico. Mérida, Junio 25 de 1872.—*Prudencio Hijelos.*

## SENTENCIA del C. Juez de Distrito.

Juzgado de Distrito del Estado de Yucatan. Mérida, Julio dos de mil ochocientos setenta y dos. Visto este juicio de amparo promovido por el defensor de Facunda Romero contra los CC. Magistrados de la Sala 1ª del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado, que sin jurisdiccion, la tienen procesada, por lesiones, conforme al artículo transitorio de la Constitucion local reformada en 21 de Enero de 1870 y con infraccion del artículo 14 de la Constitucion Federal. Visto el informe de la autoridad responsable, el pedimento Fiscal y la citacion para sentencia. Considerando: 1º Que en 20 de Setiembre de 1869, el Ejecutivo expidió la convocatoria para elecciones de los Supremos Poderes del Estado, la que en lo conducente dice: "Que en uso de la facultad que me concede la fraccion 12ª del artículo 58 de la Constitucion del Estado, (la de 21 de Abril de 1862) he tenido á bien decretar lo siguiente:—Artículo 1º Se convoca á los ciudadanos del Estado de Yucatan para las elecciones de los Poderes públicos del mismo."—Artículo 3º De conformidad con el artículo 88 de la citada ley, el primer domingo del mes de Noviembre próximo, se verificarán las elecciones de Diputados propietarios y suplentes al Congreso del Estado, de Gobernador y vicegobernador, de cuatro Magistrados y un Fiscal propietarios é igual número de supernumerarios para el Tribunal Superior de Justicia y de Escrutadores de Distrito." 2º Que el día fijado, 7 de Noviembre de 1869, tuvieron lugar dichas elecciones y entre ellas las de los Magistrados de la Sala del Tribunal Superior de Justicia á que se contrae el presente juicio, quienes debian durar en su encargo dos años, segun el artículo 82 de la Constitucion del Estado. 3º Que por esta misma Constitucion reformada en 21 de Enero de 1870, la duracion de

dos años, se convirtió en cuatro años. 4º Que estos cuatro años, se mandaron aplicar al periodo Constitucional que, por el artículo transitorio de la citada Constitucion reformada, debia empezar el 1º de Febrero de 1870. 5º Que habiéndose verificado las elecciones con sujecion á la Constitucion de 1862, no podia variarse la voluntad popular expresada en ellas, mudando la duracion de los empleados electos, y convirtiéndola de dos años en cuatro, sin faltar á sus preceptos y al artículo 14 del Pacto Federal de la República, porque semejante paso fué crear una ley para mudar la naturaleza de un hecho consumado antes, de conformidad con el tenor Constitucional, cuyo hecho no es otro que el de las elecciones celebradas en Noviembre de 1869. 6º Que dichas elecciones se verificaron con sujecion á la ley fundamental del Estado de 1862, y despues se verificaron en 7 de Noviembre de 1869, se expidió el artículo transitorio de la Constitucion reformada de 21 de Enero de 1870; luego, tanto al artículo transitorio como á la Constitucion en que se halla se les ha dado efecto retroactivo para destruir la de 1862. 7º Que esta retroactividad está condenada por los principios de legislacion universal y por el artículo 14 de la Carta Federal, por ser enteramente contraria á las instituciones republicanas, puesto que ella puede destruir la renovacion periódica de los Poderes públicos, como hubiera sucedido en esta localidad, si en vez de cuatro años hubiesen querido volver vitalicios los empleos. 8º Que se hubiera evitado la retroactividad con solo disponer que las reformas de la Constitucion á que se refiere el mentado artículo transitorio, empezaran á regir en el periodo siguiente que debia iniciar en 1872, porque entonces, las elecciones del presente año, serian posteriores á ellas y conformes en un todo á la Constitucion local y á la general. 9º Que aun cuando se quiera

tomar por base del período Constitucional la fecha de 1º de Febrero que señala para su inicio en el referido artículo transitorio, claro está que en la propia fecha de este año cesaron en su encargo Constitucional los Magistrados de la Sala 1ª elegidos en 7 de Noviembre de 1869. 10º Que por estos fundamentos han dejado de ser magistrados Constitucionales, con arreglo á la Constitución del Estado de 1862, desde el 1º de Febrero último, siendo anticonstitucional el artículo transitorio de la Constitución reformada en 1870, que les prorogaba por dos años mas la duración de su encargo, contra el cual procede el amparo, y por consiguiente contra los actos de dichos Magistrados. 11º Que entre el cumplimiento del artículo transitorio referido y el del 14 de la Constitución Federal, se debe preferir el de este último y están obligados á ello todos los jueces de la República, por el artículo 126 que dice: "Los jueces de cada Estado se arreglarán á dicha Constitución, leyes, y tratados, á pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones y leyes de los Estados," precepto que impone á todos los jueces la obligación indeclinable de examinar cada ley para aplicarla, siempre que no sea contraria á los preceptos de la Carta referida. 12º Que por esta razón y para no faltar á los artículos 836 y 837 del Código penal del Estado, el Presidente y Fiscal del H. Tribunal Superior de Justicia local, han dudado de su jurisdicción y se han separado de sus empleos, porque creen que ha cesado el período constitucional el 1º de Febrero último, como se comprueba con el periódico oficial acumulado en autos, fecha en que expiraron los dos años para que fueron electos, á que se agrega que los mismos pueblos del Estado han hecho representaciones en el mismo sentido y cuando el Poder Judicial, por la Constitución de la República es un Poder in-

dependiente, igual en importancia y categoría al Legislativo y Ejecutivo, como en Inglaterra y los Estados-Unidos, donde, según Labouley, dicen al Magistrado: "Estás encargado no solo de mantener el orden, en nombre de la ley, sino de mantener la ley y la Constitución contra todos, piensen lo que pensaren el Gobierno y las Cámaras, el Legislativo y el Ejecutivo juntos. No importa: tú, Magistrado, estás instituido para impedir que se atente contra las leyes." 13º Que no estando presa Facunda Romero sino en libertad bajo de fianza, no está infringido en su persona el artículo 16 de la Constitución Federal. Por lo expuesto, y de conformidad con los artículos 101 y 102 de la Constitución Federal y el pedimento Fiscal, la autoridad decreta: 1º La Justicia de la Unión ampara y protege á Facunda Romero contra los CC. Magistrados de la Sala 1ª del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado, que sin jurisdicción la tienen procesada, conforme al artículo transitorio de la Constitución local reformada en 21 de Enero de 1870 y con infracción del artículo 14 de la Constitución Federal. 2º Sáquese testimonio de este fallo para publicar y elévense los autos á la Suprema Corte de Justicia de los Estados-Unidos Mexicanos para su revisión, de conformidad con los artículos 13 y 27 de la ley orgánica de 20 de Enero de 1869. Notifíquese.—*I. Manzanilla.*—Ante mí, *José Anacleto Castillo.*

Es copia que certifico. Mérida de Yucatán, Julio ocho de mil ochocientos setenta y dos años.—*José Anacleto Castillo*, secretario.

EJECUTORIA de la Suprema Corte de Justicia.

México, Julio 18 de 1872.—Visto el juicio de amparo promovido por Facunda Romero, contra los CC. Magistrados



de la 1ª Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatan, que sin jurisdiccion la tienen procesada por lesiones, conforme al artículo transitorio de la Constitucion local, reformada en 21 de Enero de 1870, segun la quejosa, con infraccion del artículo 14 de la Constitucion general de la República. Vistas las constancias de autos. Y considerando: 1º que en Noviembre de 1869 fueron electos popularmente los CO. Magistrados de la 1ª Sala del Tribunal de dicho Estado para ejercer sus funciones durante dos años contados desde primero de Febrero de 1870, conforme al artículo 85 de la Constitucion vigente del Estado. 2º: que despues de hecha y declarada la eleccion popular de los mismos CO. Magistrados, reformó la legislatura, en 21 de Enero de 1870, varios artículos de la Constitucion del Estado, entre ellos el 85, estableciendo en el reformado que los Magistrados durasen cuatro años, y disponiendo en el artículo transitorio de la Constitucion reformada, que las reformas rigiesen en el período que iba á comenzar el primero de Febrero del mismo año. 3º: que el hecho de modificar por una ley posterior los efectos de una eleccion popular hecha antes, extendiendo á un tiempo mayor la duracion del mandato conferido por el pueblo para un tiempo menor en las elecciones de un Estado, es contrario al sistema representativo popular, garantizado á los Estados por el artículo 109 de la Constitucion Federal, é importa dar una ley retroactiva contra lo dispuesto en el artículo 14 de la misma Constitucion. 4º: y que no teniendo ya los CO. Magistrados referidos autoridad competente para procesar á la que ha promovido este recurso de amparo, se infringe con sus procedimientos el artículo 16 de la Constitucion Federal.

Por lo expuesto, y conforme á los artículos 101 y 102 de la Constitucion, se decreta: que es de confirmarse y se con-

firma la sentencia del juez de Distrito de Yucatan en los términos siguientes:

La Justicia de la Union ampara y protege á Facunda Romero, contra los actos de jurisdiccion ejercidos en el proceso que se le está formando por los Magistrados de la 1ª Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatan, con cuyos actos se infringen en la persona de la quejosa las garantías consignadas en los artículos 14 y 16 de la Constitucion Federal.

Devuélvanse las actuaciones al Juzgado de su origen con copia certificada de esta sentencia para los efectos consiguientes: publíquese por los periódicos y archívese á su vez el Toca.

Así lo decretaron, con excepcion de un solo voto los Ciudadanos Presidente y Ministros que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos mexicanos, y firmaron.—*S. Lerdo de Tejada.*—*Pedro Ogazon.*—*José Arteaga.*—*P. Ordaz.*—*Ignacio Ramirez.*—*M. Auza.*—*S. Guzman.*—*Luis Velazquez.*—*M. Zavala.*—*J. García Ramirez.*—*Luis María Aguilar*, secretario.

Son copias que certifico.—México, Julio 31 de 1872.—*Lic. Agustin Peralta*, oficial mayor.

CIVIL.—Autos seguidos en el Juzgado de Distrito de Puebla por los Sres. D. Domingo y D. José María Calderon y el Presbítero D. José Joaquín Rojano, sobre preferencia de derechos á una capellanía fundada por Calderon Becerra.

#### PEDIMENTO DEL C. PROCURADOR GENERAL DE LA NACION.

El Procurador general de la Nacion dice: que en el Juzgado de Distrito de Puebla se siguieron unos autos por los Sres. D. Domingo y D. José María Calderon y el Presbítero D. José Joaquín Rojano, sobre preferencia de dere-